



# *no transar*

Órgano de Prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

*¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!*

Año 23 - (3ra. época)

**EDICIÓN ESPECIAL**

16-11-2020

# **FUERA FMI DE LA ARGENTINA**

**Hacia otro acuerdo con el FMI**

Pág.10

**Guernica: crónica y enseñanza de una lucha**

Pág.19

**Elecciones en EEUU**

Pág.33

**¡ABAJO LA DENUNCIA CONTRA  
VIVIANA TOROS Y MAXI TORRES!**

## Editorial

# De la mano del Fondo, hacia un nuevo ajuste

### Ninguna expectativa con Joe Biden

Luego del triunfo de Biden en EEUU, el canciller Solá opinó exultante sobre las mejores posibilidades de obtener el apoyo en las negociaciones actuales con el FMI. Por las dudas, previo al desarrollo de las elecciones ya había votado la condena a Venezuela en la ONU a principios de octubre, para congraciarse con el mundo financiero.

La consagración del candidato demócrata generó tranquilidad en sus aliados más estrechos, europeos principalmente, y a la vez un cúmulo de especulaciones en los países emergentes afectados por la crisis y con elevado endeudamiento externo. Más allá de la incertidumbre por las denuncias y el rechazo del actual presidente Trump, el encumbramiento de Biden parece inevitable. No así desde los hechos concretos y las confrontaciones abiertas antes y durante la elección, con todas las desavenencias que están planteadas y que deberían armonizar entre ambas fuerzas antes del ritual del traslado de mando, a concretarse en enero próximo. EEUU ya no puede esgrimirse como modelo de la democracia y menos aún intervenir en otros países en nombre de la libertad. Su legitimidad

está cuestionada por el mismo pueblo americano, cuya participación (67%) en el acto electoral es inédita por cierto, pero cuyo rasgo principal viene de arrastre por la crisis que atraviesa, agravadas por el negacionismo presidencial frente a la pandemia, pero sobre todo por la rebelión del pueblo contra el racismo, la brutalidad de las fuerzas policiales y la indefensión en la que se encuentran amplios sectores sin protección sanitaria alguna. Razones que confluyeron, entre otras, en la derrota de Trump. Sembrar expectativas en el candidato sin considerar el rol imperialista y/o gendarme que ejerce EEUU en el mundo, además de oportunista supone perder todo rasgo de independencia como país no alineado. El geronte Biden hace 47 años vive de la política en nombre del partido demócrata. Un verdadero burócrata con 39 años como senador y 8 como vicepresidente de Obama. Protagonista y copartícipe de las principales decisiones del Pentágono, independientemente de quién fuera el presidente, ya sean las invasiones o bombardeos a Irak, Afganistán, Siria, Libia. Trump no es un accidente por cierto, pero no hay razones para suponer que todo será distinto con Biden.

## **Los apuros del ministro**

Dijimos que el límite principal del gobierno estaba en su propio proyecto. Sin novedades en cuanto a los cambios estructurales, los acuerdos con los bonistas y el actual frenesí por obtener del FMI dólares frescos, tanto como la negativa a expropiar

oportunamente o asumir el control del grupo Vicentín, cerraron toda posibilidad de proyectarse con un programa de transformaciones profundas. De aquí en más, como ya sucedió otras veces, el proyecto peronista, que despertó el entusiasmo inicial ante al estrepitoso fracaso del macrismo, se diluye en los estrechos pasadizos de una economía cuasi-liberal. La heterodoxia expresada por Martín Guzmán como apadrinado de Stiglitz, ha devenido en ortodoxia plena, de tal forma que resulta muy difícil mantener el discurso cuando no hay lugar para progresismo.

La posibilidad de una devaluación brusca, sin colchón de reservas, no está cerrada. Desde que asumió Alberto el valor del dólar mayorista aumentó un 99%, mientras el dólar paralelo otra vez está alrededor de los \$170. De allí los apuros por un nuevo préstamo, visto un cierre de año sin recupero de la actividad económica y con más pobreza, desocupación y hambre. Tampoco pasan desapercibidas las elecciones de medio término en 2021. Los apremios del ministro Guzmán giran en la necesidad de recibir dinero fresco, de cualquier forma, a efectos de fortalecer las exiguas reservas antes de que lo gradual se transforme en corrida abrupta y empuje al descontrol de precios. Ni el ministro regatea mucho ni tampoco el FMI abarata nada ni ahorra para imponer condiciones. Curado en salud, Guzmán va por más y busca reducir el déficit fiscal de -4,5%, presupuestado para el año próximo, al -3,5%. En función de ello dispuso la desaparición del IFE y ATP, una nueva cepillada a los jubilados con la mo-

vilidad social y la reducción de subsidios a partir de la liberación de tarifas y descongelamiento en los precios máximos.

Preocupa la inflación siendo que el índice de octubre llegó a 3,8% y con ello la interanual a 37%. Esto sucede con tarifas congeladas y lista de precios máximos, por lo cual se espera que con su liberación -incluidos nafta, gas y luz en noviembre y diciembre- crecerá por encima del 4% mensual, llegando a una interanual de 40%, Los rubros con mayor alza fueron vestimentas, calzado y alimentos, con lo cual otra vez, sus efectos castigan a los que menos tienen.

## **De nuevo economía de mercado**

El gobierno entró totalmente en la lógica de la economía de mercado controlada por los grande grupos y bancos. Autorizó que los bonistas Pimco y Templeton (U\$S 750 millones) canjeen sus bonos en pesos por dólares, a vencer en 2030 y con tasas de usura. Vuelve a elevar los intereses en plazos fijos al 37% para contener la emisión con lo cual encarece el crédito interno sobre las pymes.

Un caso a destacar, que permanece ignorado por la resonancia y a su vez el desparpajo de la dirigencia política, es la denuncia de Alejandro Olmos a partir del último balance del Banco Central, sobre la deuda y pago que dicha institución realiza al sistema financiero. Son \$4.772 millones diarios en concepto de intereses por Leliq y pases internos. Es decir \$143.160 millones mensuales, cuando por otro lado

se niega el pago del IFE que beneficia a 9 millones de pobres, y significan solo \$90.000 millones. Por otro lado muchas fricciones y balbuceos para hacer votar el impuesto a las grandes fortunas, con el que se pretende recaudar por única vez aproximados \$ 300.000 millones, siendo que con dos meses de los intereses mencionados que paga el Central a la banca interna, se completa casi el mismo monto. Tan meneado impuesto debería ser definitivo y sumar a otras decisiones, para desmentir a quienes dicen que no se puede cuando la verdad es que no se quiere. Los apuros de Máximo-Heller para que se apruebe en esta semana apuntan a simular un equilibrio de cargas, visto que todas las disposiciones fueron de neto corte ajustador, impropio de un gobierno que se supone vino para hacer lo contrario al anterior. La decepción popular crece y con ello se complican los ajustadores y quienes pretenden forzar la contención social.

El rumbo económico impreso no tiene retorno. Los acuerdos de pago de la deuda con bonistas e instituciones financieras, arreglos en gestación con aceiteras y multinacionales o la renuncia a expropiar determinadas palancas productivas, entre otras, responden a la decisión política de un gobierno peronista que se esmera en recomponer la gobernabilidad del capitalismo monopólico sin afectar los intereses de las clases dominantes. Aquel slogan de “liberación o dependencia” ya no forma parte de su identidad. Fue reemplazado por el híbrido que habla de “recuperar la nación” sin aplicar la justicia social ni cortar con los beneficiarios del saqueo. La

inclinación pro-fondomonetarista es opuesta a todo rasgo de independencia o de cambios estructurales que se pretendan.

## **Guernica: un punto de referencia**

La búsqueda de consenso con el “círculo rojo” tuvo sus implicancias. Las reuniones con los empresarios (AEA) donde asistió el propio Magonetto de Clarín y Paolo Rocca de Techint fueron en paralelo con la decisión política de recomponer credibilidad y reglas de funcionamiento. La carta de Cristina convocando a la unidad de los distintos sectores para abordar, entre otras, la condición bimonetaria de la economía, también fue un espaldarazo.

En esos días vencían los plazos de la toma en Guernica. La decisión de reprimir fue parte de aquel consenso. Luego de negociar tres meses, la negativa de cerrar el preacuerdo dos horas antes solo se puede explicar desde dicha perspectiva. La justificación del ministro represor Berni, amparado en la determinación de un juez totalmente funcional, tanto como la del secretario de La Cámpora 'Cuervo' Larroque que responsabilizó a organizaciones de izquierda, ocultan que primó el desalojo como gesto de autoridad, independientemente de la firma del convenio. La presión del poder fáctico, consternado porque se puso en debate la propiedad privada desde la mirada del derecho a una vivienda digna, pudo más que las justificaciones del gobernador Kicillof que finalmente ordenó desalojar. Lo cierto es que para muchos militantes del FdT, la imagen de

las topadoras rodeadas de uniformados y al mando de un coronel fanfarrón arrasando humildes casillas, resulta difícil digerir y explicar.

Desde otra perspectiva el intento de Grabois por señalar la impostura de familias como los Etchevehere, cuya posesión de la tierra está cuestionada, expresa un camino distinto al plan de ajuste del gobierno de los Fernández. El blanco bien elegido y la ocupación como método, abrieron un debate que el gobierno pretende acallar. A la vez, nuestra observación crítica sobre la valoración de la iniciativa, que no terminó bien, porque el balance sobre derrota o victoria no puede depender nunca de una decisión judicial, so pena de caer en el facilismo. La lucha de clases es abierta y en ella hay amigos y enemigos. La gran burguesía agraria forma parte de estos últimos. Como que tampoco habrá soberanía alimentaria ni reforma agraria alguna, sin soberanía política ni económica. Para ello se requieren medidas confluyentes con la lucha popular como parte de un programa que está en las antípodas del oficialismo.

## **El cambio no aparece. Se afirma la bronca**

Al cierre del primer año de Alberto Fernández, las expectativas de cambio presumen estar frente a un nuevo fracaso. Más allá de la pandemia cuyos efectos no se disipan con una incierta vacuna, las condiciones de vida del pueblo se agravaron y el ritmo de recuperación aparece muy distante. Con salarios cerrando a la baja en acuerdo con la buro-

cracia sindical y una masa de 6,5 millones de desocupados -cuya mejoría no se resuelve con un plan o changas discontinuas-, el abismo con el costo de la canasta familiar (\$47.000) se profundiza paralelo al ajuste implementado. Terminar con las tomas de tierra cuando faltan 3,5 millones de viviendas, quitar el IFE sin generar trabajo genuino, planchar salarios sin controlar la inflación: todo ello no se puede contener con represión. Tanto la tierra para vivir, los alimentos, y un ingreso único obligatorio, son derechos que la masa viene exigiendo con la acción directa. El protagonismo y la movilización popular son parte de la democracia y sería un error dejar en manos de la dirigencia política ya fracasada decisiones que hacen al presente y futuro de la nación. De allí que junto a la lucha del movimiento piquetero y la juventud, los trabajadores municipales y estatales, crecen también los movimientos contra las quemas o la megaminería como en Chubut, al igual que los espacios de Autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda.

Todos juntos, superando los paños fríos que colocan la CGT, CTA y movimientos oficiales, son parte de ese auge de luchas que sopla en la región sin condicionamientos de tiempos electorales.

**Andrés Zamponi**

# Hacia otro acuerdo con el FMI

*El pasado martes 10/11 llegó a nuestro país una misión del FMI, cuyo objetivo es negociar las condiciones de la reestructuración de la deuda de U\$S 44.000 M (más intereses) que Macri nos legó.*

Al cierre de esta edición, tanto los voceros del gobierno como los medios de comunicación opositores manifiestan que la intención del ministro de Economía Martín Guzmán, es obtener un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, en inglés) con una refinanciación de la deuda a 10 años y un período de gracia de 2 a 4 años sin pagos de capital e intereses. Asimismo, se rumorea la posibilidad de “oxigenar las reservas” del Banco Central aceptando recibir una parte del préstamo originalmente autorizado (cuyo monto total era de U\$S 57.000 M) y suspendido tras las PASO en 2019.



En ese camino, el gobierno da “señales” a los mercados y al propio Fondo: un Presupuesto 2021 sin la asistencia salarial y social vinculada a la pandemia, los aumentos jubilatorios por decreto y una nueva reforma previsional, la emisión de bonos vinculados a la cotización del dólar (para beneficio de los inversores financieros) y el anuncio de un “programa de consolidación macroeconómica plurianual” con metas fiscales, monetarias y financieras hasta 2025 (una forma pomposa de ajustar) próximo a ser presentado en el Congreso.

Adicionalmente, tanto el FMI como el oficialismo buscan “abrochar” a los bloques políticos y actores relevantes (sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones sociales), para garantizar un “consenso por arriba” en torno a una política económica centrada en el compromiso con el capital financiero y las instituciones de crédito internacionales. En ese sentido, el “partido de la deuda” está integrado por casi todos los bloques políticos y sociales, que buscarán aplacar las luchas del pueblo trabajador contra una nueva ronda de ajuste. En dirección opuesta se ponen en pie espacios como la *“Autoconvocatoria contra la deuda externa y el FMI”*, que lleva adelante actualmente un juicio popular contra la deuda y se moviliza en todo el país ante la llegada del organismo.

Las señales económicas y los acuerdos políticos cobran sentido dado el enorme ajuste y la entrega que supone la renegociación en curso. Mientras que el préstamo de tipo *Stand By* negociado por

Macri implica una mínima supervisión de determinadas metas fiscales pactadas de antemano con el FMI, el acuerdo negociado por Guzmán y Alberto supone 1) una supervisión completa de la economía por parte del organismo, 2) el recorte de los gastos del Estado justo cuanto más se lo requiere, en un contexto recesivo y de grandes necesidades sociales, y 3) la implementación de “reformas estructurales” que golpean a rubros ligados al bienestar popular como salarios, convenios laborales, jubilaciones, educación y salud -reformas que Macri no pudo aplicar, gracias a la resistencia popular. En términos globales, el acuerdo profundizaría la injerencia del organismo y los países que lo conforman, especialmente EEUU, en el rumbo de la política económica y social del gobierno: un enorme retroceso en la soberanía nacional.

Por el contrario, es legítimo el cuestionamiento de la deuda con el FMI, tal como lo era aquella contraída con los acreedores privados, puesto que se trata de una deuda odiosa. El gobierno de Macri y el FMI conocían de antemano -y pudieron ver en tiempo real- el destino de los fondos: lejos del bienestar popular, fueron a financiar la bicicleta financiera y la posterior fuga de capitales. Por si fuera poco, el préstamo se hizo incumpliendo los propios estatutos del Fondo, y ambas partes sabían que el país sería incapaz de afrontar la devolución del crédito en los plazos y montos establecidos. Más razones para cuestionar su legitimidad y exigir una auditoría e investigación de todo el endeudamien-

to, y que paguen aquellos se la llevaron en pala. Por otra parte, la renegociación de la deuda es acompañada por una estrategia económica que profundiza el extractivismo y la reprimarización en curso, para obtener inversiones extranjeras y una rápida recaudación de dólares ligadas al agronegocio, todo ello con el objetivo de cumplir con los vencimientos. En ese camino deben leerse las subvenciones a la producción energética vinculadas a Vaca Muerta, la rebaja transitoria en las retenciones a la soja y derivados y el acuerdo de producción porcina con China, entre otros. El modelo tiene un enorme costo sanitario y ambiental -el caso más reciente, los incendios de montes y humedales para uso agrícola en Córdoba y Santa Fe- y profundiza la concentración económica en unos pocos ganadores (cerealeras, pooles de siembra, etc.). Por ello, la exigencia del no pago de la deuda es acompañada por un plan económico alternativo que comience por la estatización del sistema bancario, el comercio exterior y los recursos naturales estratégicos para reorientar el conjunto de la economía en dirección al bienestar popular, el desarrollo productivo y la sustentabilidad con el medio ambiente.

La crisis económica no se resolverá por el mismo camino que nos trajo a ella, ni la resolverán los protagonistas del endeudamiento. Una nueva orientación política y económica solo puede ser obra de la intervención popular rebelde.

**David Paz**

**16 de noviembre**  
**Jornada Nacional de Lucha**

**Fuera  
el FMI**

**No al Ajuste  
y las Reformas Estructurales**

**La Deuda es con el Pueblo  
y la Naturaleza**

**Jubilación; Salarios  
y Vida Digna para Todes**

**Que paguen  
quienes se beneficiaron  
de la estafa**

LA DEUDA  
ES CON EL  
PUEBLO

**15 hs.** Obelisco a Plaza de Mayo  
Actos en varias provincias



Autoconvocatoria  
por la suspensión  
del pago  
e investigación  
de la deuda

+

Otras  
organizaciones  
populares

# De ajuste, FMI, paritarias y cúpulas sindicales

*Se acerca el fin de un año absolutamente olvidable, en particular para los trabajadores y trabajadoras. La pandemia y una crisis social y económica, como no se conocía desde diciembre del 2001, provocan un brutal deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares. Y, como en aquella oportunidad, entre las causas que se repiten están las políticas de endeudamiento, bajos salarios, desocupación y flexibilización laboral, entre otras.*

Si entonces se suspendieron los pagos de la deuda externa ahora, borrando sus promesas electorales, el gobierno de Alberto Fernández anuncia un ajuste a gusto del paladar del FMI para pagarles los 44.000 millones de dólares recibidos por Macri. Más allá de los eufemismos, se trata de un paquete para bajar el déficit fiscal compuesto por un nuevo cálculo jubilatorio, reducción de los programas sociales y terminar con el IFE, más el fin del congelamiento de las tarifas de electricidad, gas y agua a partir de enero.

Cómo será la agachada que la cúpula de la CGT, a través de un documento del 10/11 señaló su “preocupación ante la difusión pública de medidas gubernamentales...”.

Una dirigencia gremial que acordó en silencio las suspensiones y recortes salariales, que toleró pasi-

vamente los despidos y que, en el documento citado, afirmó: "Con la responsabilidad social que nos cabe, acordamos con los empresarios medidas extraordinarias para sostener el ingreso de los trabajadores, negociamos la renovación de los Convenios Colectivos de Trabajo en las condiciones más críticas y garantizamos la paz social en los momentos más difíciles". Para terminar con: "Entre todos hemos construido una red de contención que evitó el colapso social en los momentos más críticos."

Asistimos así a las dos caras de la cúpula de la CGT: 'contención social' y acuerdo con las grandes patronales. De la caída del salario y el empleo y del ajuste al gusto del FMI ni una palabra.

Mientras a las dos CTA, su alineamiento político con el gobierno nacional las arrastra hacia una conducta desmovilizadora. La conducida por Yasky flota entre el proyecto de "aporte solidario" de las grandes fortunas y defender el ajuste promovido por el FMI. La CTA Autónoma en tanto vacila ante el rumbo capitulador frente al gran capital del gobierno de Fernández.

## **Paritarias y caída del salario**

En medio de la pandemia y el colapso social se han cerrado la gran mayoría de los acuerdos paritarios. Se estima que el porcentaje alcanza al 85%.

"La característica que prevalece en la ronda de paritarias 2020, es la diversidad de acciones acordadas por las organizaciones sindicales y empresariales en relación a la cuestión salarial. Mientras

que un conjunto de convenios colectivos sectoriales mantuvo el esquema habitual de aumentos porcentuales de las escalas por el término de un año, otra proporción de convenios definió incrementos salariales transitorios menores al año a través de sumas fijas o porcentajes” (De un informe del Ministerio de Trabajo- Ámbito Financiero- 24/10/20). Del total de los acuerdos firmados, una minoría del 30% lo hizo por un año, mientras, el 70% restante lo hicieron por lapsos menores que van de los tres a seis meses, lo que habla de la precariedad de este proceso.

Sin embargo, casi todos los convenios se firmaron con montos inferiores a la inflación, en cuotas y con demoras. Salvo unas pocas excepciones, los sindicatos de mayor poder de negociación, que al menos empataron con la suba de precios. "Todos quedamos por debajo de la inflación", reconoció Andrés Rodríguez, el jefe de los estatales de UPCN y número tres de la CGT (11/11).

En muchos casos además los aumentos son no remunerativos, es decir están eximidos de aportes previsionales y no se incorporan al básico. Si bien es cierto que algunos acuerdos contemplan un bono, no altera el sentido de salarios a la baja. Ni hablar de recuperar la caída salarial que viene de arrastre de los años 2018 y 2019, que algunos trabajos calculan en una quinta parte de pérdida del poder adquisitivo como mínimo.

Un caso particular es el que padecen los estatales y docentes. Del 7% ofrecido por el gobierno y aceptado por UPCN al monto similar de la ‘paritaria na-

cional' de Ctera coloca a los salarios del personal estatal muy lejos debajo de la línea de pobreza. Al parecer el papel cumplido con creces en esta pandemia no es merecedor de los \$69.000 de salario inicial que acordaron para la policía bonaerense tras las medidas de fuerza.

## **El camino a seguir**

En este marco, la intervención organizada y activa de los trabajadores y trabajadoras está a la orden del día. Al mismo tiempo, es necesario superar la contención de la cúpula cegetista y la conducta desmovilizadora de las CTAs.

Desde la Corriente Sindical Jorge Weisz venimos impulsando esta intervención convocando a participar de encuentros sindicales para promover y mejorar nuestros aportes a la lucha de la clase trabajadora.

Bajo un programa en defensa de la salud, el salario y las jubilaciones, por la reapertura de paritarias, contra los despidos y suspensiones, no a la flexibilización laboral, no a los recortes de los programas sociales, viviendas populares y solidaridad con las tomas de tierra, repudio a la represión a los que luchan y a la brutalidad policial y el gatillo fácil que amedrenta, desaparece y asesina a los jóvenes de las barriadas humildes, es hora de elevar la tarea, se trata de terminar con la Argentina de los monopolios para dar paso a un verdaderamente popular y antiimperialista.

**R. Jufré**

# Guernica: crónica y enseñanza de una lucha

*El jueves 29 de octubre, el gobierno provincial de Axel Kicillof, junto a su ministro de Seguridad Sergio Berni, decidió desalojar a las 1400 familias que se asentaban en un terreno de más de 90 hectáreas en la ciudad de Guernica, municipio de Presidente Perón.*

Este proceso de recuperación de tierras comenzó el 20 julio y fue el método que encontraron miles de familias para hacer frente a la crisis habitacional que se extiende a lo largo y a lo ancho del país. Transformando la necesidad en rebeldía, tomaron con sus propias manos lo que este sistema injusto les niega para avanzar en resolver el hacinamiento, la posibilidad de un techo propio, la huida de la violencia machista. Un pedazo de tierra para construir sus casas y reconstruir sus sueños.



La crisis habitacional, el hacinamiento y la falta de vivienda digna son la consecuencia de un proyecto de país en donde la tierra la acaparan los pools de siembra y los mega proyectos inmobiliarios, así como también súper millonarios locales y extranjeros. La situación de desocupación creciente acelerada por la pandemia profundizó esta crisis. Con el avance de la frontera sojera, que no significó más trabajo, la población rural migra hacia el primer, segundo o tercer cordón de los grandes conglomerados urbanos en busca de subsistir. La construcción de viviendas no está planificada según las necesidades de la población, sino que está basada en las ganancias de unos pocos. Y si bien existen leyes y decretos que instan a los estados nacionales y provinciales a garantizar el acceso a la vivienda digna, se ve que para ellos los derechos sociales no están a la altura de la intocable propiedad privada.

Como este sistema no garantiza el acceso a la vivienda y la gente en algún lado tiene que vivir, las tomas de tierras han sucedido históricamente en este país. El ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) creado por ley 27.453 del 2018, tiene registrados alrededor de 4.400 "barrios populares", asentamientos precarios, en todo el territorio nacional. Estas barriadas comenzaron como tomas de tierras y luego de un largo proceso de lucha y organización popular, se consolidaron como barrios "reconocidos". Esto sirvió para que no sean desalojados, pero las obras de urbanización (calles, alumbramiento, limpieza, etc) y de acceso a

servicios básicos (agua, luz, internet) mayormente no son garantizadas por el Estado. Esto redundó en incendios por sobrecarga de los cables, cortes de luz, incendios y enfermedades prevenibles si se tuviera mejor tratamiento de los desechos y en el caso de la pandemia por el Covid-19, quedó claro qué pasa con la falta de acceso al agua.

La recuperación de tierras en Guernica fue distintiva por su extensión (90ha) y por la cantidad de familias que la protagonizaron, alrededor de 2500. La primer respuesta del gobierno municipal, con Blanca Cantero a la cabeza (PJ - FR), fue amedrentamiento policial y un censo trucho, que utilizaron para armar causas a las personas que lo respondieron. 40 días después del inicio de la toma, el gobierno provincial con un equipo de funcionarios provinciales, encabezado por el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la comunidad de la provincia de Buenos Aires, empieza a intervenir en terreno.

Mientras tanto la organización de las familias iba creciendo y fortaleciendo. Con el apoyo y acompañamiento de las organizaciones se realizaron asambleas generales y se eligieron delegados de cada uno de los cuatro barrios. La solidaridad también se hizo sentir y las ollas populares se multiplicaron con el aporte de cada vecino y vecina. En la medida en que "la toma de Guernica" crecía en su repercusión, más organizaciones, militantes, personalidades del arte y al cultura, y los propios vecinos del municipio, se acercaron a llevar su apoyo y solidaridad. Las caravanas con donaciones y los

centros de acopio en los más disímiles lugares, dan cuenta de un pueblo solidario que no dudó en movilizarse para apoyar a las familias que lo necesitaban. Al mismo tiempo, trabajadores y trabajadoras de la salud pusieron sus conocimientos al servicio de la población, organizando postas sanitarias para el escenario de un desalojo y relevamiento de la población para apoyar lo que las asambleas iban resolviendo. Así se conformó la Comisión de Salud de la toma de Guernica, ejemplo de poner la salud al servicio del pueblo.

El gobierno provincial combinó el diálogo con la represión. A las declaraciones que demonizaban a los "usurpadores" le siguieron distintas acciones de hostigamiento. Por otro lado Larroque, con su perfil "dialoguista", instalaba carpas del Ministerio de Desarrollo, acompañados por el Ministerio de la Mujer. Con la realización del segundo censo oficial, empezaron los llamados a las familias. El ofrecimiento era un subsidio habitacional por tres meses y/o la entrega de materiales para aquellos que tuvieran un lugar para construir (generalmente en la casa de un familiar, o sea más hacinamiento). No hay precisiones al día de hoy sobre cuántas familias aceptaron esta propuesta. Lo que sí es claro, es que este tipo de asistencia, focalizada en la emergencia, nunca resuelve ni resolverá el problema que motivó la toma: el acceso a la vivienda. Solo es patear la pelota para adelante.

Luego de esta etapa, el gobierno lanzó una ofensiva mediática muy fuerte. El planteo era que con el ofrecimiento anterior 700 familias habían aceptado

irse del lugar y que para ellos quedaban solo 200. En la mesa de diálogo se pactó la realización de un nuevo censo con veedores de organismos de derechos humanos (CELS, SERPAJ) que relevó 1400 familias. El gobierno desconoció los resultados con cinismo.

El desalojo fue dictado por el juez Martín Rizzo a instancias del fiscal Condomí Alcorta. Ambos responden directamente a la intendenta Cantero. Pero la usurpación de un terreno que no se encuentra habitado y no está enrejado no configura delito alguno. Más allá de esto la primera plana del gobierno nacional y provincial hicieron declaraciones, imputando como delito tal accionar y haciendo que intervenga la justicia en un tema que debe intervenir el ejecutivo. Los sucesivos aplazos de concretar la orden se explican por el desconcierto del gobierno provincial al comienzo de la toma. Además del destacado trabajo de la Gremial de Abogados y Abogadas, la fortaleza de la organización y la movilización, así como una serie de internas hacia



arriba que tenían arrinconado al gobierno, fueron determinantes para que no avanzarán con el desalojo express como primer medida.

La última acta acuerdo -bautizada plan "refugiados"- consistía en trasladar a otros terrenos de transición a unas 200 familias, en carpas, esperando por una solución definitiva en 4 o 6 meses, al mismo tiempo ponía a disposición algunos dispositivos (paradores, clubes) para que un número menor de familias puedan pernoctar. La propuesta no alcanzaba al conjunto de las familias pero había una supuesta voluntad por parte del gobierno de seguir dialogando para trabajar en nuevas reubicaciones con el correr del tiempo.

El movimiento de lucha debatía en reuniones y asambleas la próxima jugada, mientras Berni movilizaba tropa y preparaba 4.000 efectivos para avanzar sobre el predio. Varias personas eligieron no creer en las promesas pero la mayoría votó firmar el acta, a condición de que al empezar las relocalizaciones, se continúe con la mesa de diálogo y no se desalojara al resto, para que la solución fuera para las 1400 familias censadas.

Este fue el punto que el gobierno no estuvo dispuesto a conceder, dejando en claro que ya habían tomado la decisión de reprimir. Es de destacar que las familias a quienes les habían ofrecido el traslado, ante la negativa del gobierno de continuar las negociaciones, votó quedarse peleando.

El gobierno desgastó y dividió, calculó el costo político y decidió pagarlo. El desalojo fue decisión política del gobierno provincial que un día antes

de que se cumpla el plazo puesto por el juez, presionado por los intendentes del Conurbano y los reyes del negocio inmobiliario, dejó familias en la calle, para construir canchas de golf y barrios privados. No parece casualidad que, al mismo tiempo que se barajaba la represión en Guernica, bajaba el dólar y se reunían con el “círculo rojo”, recuperando cierta estabilidad.

Guernica puso el problema de la toma de tierras en primera plana. Instaló la discusión del derecho a la vivienda y desnudó los intereses de quienes le contrapusieron el respeto a la propiedad privada, desluciendo aún más al progresismo flojo de papeles de los gobiernos nacional y provincial. En un contexto de ataque a las condiciones de vida de las masas -especialmente las más empobrecidas- marcó un rumbo para la pelea popular. La dificultad que tuvo el gobierno para lograr el desalojo dan cuenta de que, si bien la pandemia debilitó la lucha del pueblo, no logró doblegarla.

Yendo a lo interno, la organización en base a un cuerpo de delegados y asambleas logró mantener la cohesión frente al desgaste lógico de una lucha tan larga: en ese sentido, Guernica planteó un modelo. Queda por repasar hasta qué punto la orientación política estuvo a la altura de la pelea que se terminó dando, ya que los próximos conflictos serán sin duda más duros. Queda en el debe también, una línea más firme para que sea la propia vanguardia natural la que le ponga límites a los planteos sectarios que debilitan el proceso.

Uno de los saldos positivos pasa por la experien-

cia vivida en tantas familias, militantes y nuevos activistas que se suman al torrente de luchas. Muchos desencantados con el gobierno que ven cómo esas expectativas puestas en una urna las quemó la policía junto con sus pertenencias. La lucha por vivienda digna sigue vigente y hay que hacer esfuerzos por confluir por una respuesta concreta frente a esta necesidad. Hoy muchas familias volvieron a estar en situación de calle, otras están en casas amigas, rebotando de lugar en lugar, y otros están en paradores. En las asambleas y reuniones con vecinos y vecinas realizadas después del desalojo, se constata la voluntad de continuar con la lucha ya que la necesidad es grande y los palos y gases han generado más bronca que miedo.

Es imprescindible para encarar esta nueva etapa recuperar lo mejor de lo hecho hasta ahora. La confluencia entre familias y organizaciones, con el centro puesto en resolver la necesidad de vivienda. Buscando espacios de unidad y debate fraterno, en las asambleas y las comisiones. Con cortes de ruta, ollas populares y acampes, preparándonos para las confrontaciones que se vienen.

**Victor Pucará**

# Por un 25N de lucha y en las calles

El 25 de Noviembre es el Día de Lucha contra la violencia hacia las Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No binaries. El asesinato de las hermanas Mirabal a manos del dictador Trujillo en esta fecha, nos recuerda la importancia de su lucha y nos convoca a las MLTTBNb de América Latina a dar pelea contra la desigualdad y la opresión, por nuestros derechos y contra el yugo imperialista en la región. Esto toma relevancia en nuestro país, luego de un año en el que el gobierno de Alberto Fernández acordó el pago de la odiosa e ilegítima deuda externa y se apresta a realizar otro acuerdo de pago con el FMI en medio de una profunda crisis económica. En este contexto se ha visto agravada la violencia contra las mujeres en todos sus niveles y es importante que este próximo 25N salgamos a las calles y logremos romper el inmovilismo en el que se encuentra buena parte del movimiento de mujeres y feminista. La bronca y el hartazgo ante la falta de respuestas por parte del gobierno están presentes y tenemos que lograr que se expresen en el lugar donde nuestra lucha cobra fuerza y tenemos el poder de conquistar nuestras demandas, sobre todo porque la situación apremia y el 2021 se viene con más ajuste y su impacto es mayor entre nosotras.

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

(ELA) elaboró un informe analizando las partidas presupuestarias destinadas a disminuir las brechas de género y las partidas etiquetadas (PPG). Se denomina así la asignación de recursos a un programa o acción específica que contribuya a achicar la brecha en términos de género, esperando que el impacto disminuya la desigualdad. En el presupuesto que se está por votar para el 2021 figura un aumento en las partidas con perspectiva de género del 2% al 15%, que se ejecutarían en su mayoría (85,71%) por la ANSES, reservándose la mayoría del presupuesto asignado al MMGyD, a la implementación del Programa Acompañar. El presupuesto está destinado principalmente a la asistencia más o menos temporaria y a la posibilidad de subsistir. Un dato a tener en cuenta entre otros que se pueden analizar de este informe, es que en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, no existe una partida presupuestaria específica que contemple la necesidad de vivienda digna y propia para las mujeres que están en situación de violencia machista, demanda de primer orden que ten-



dría que contemplar cualquier política pública que se proponga generar autonomía en la vida de las mujeres y el colectivo trans travesti. Tampoco figura presupuesto específico en cuanto a políticas de empleo.

Ahora bien, con la visita del FMI lo que se viene, por más que quieran dibujarlo con números violetas, es un presupuesto de ajuste al pueblo trabajador de acuerdo a los lineamientos que impone este organismo. El ajuste que quieren implementar a las jubilaciones es gráfico en este sentido. Todo indica que la crisis continuará agudizándose, toda vez que la política del gobierno se encara a congraciarse con los usureros de siempre y no con las necesidades populares. Y en este punto nos llevamos la peor parte: siete de cada diez personas del grupo de menores ingresos somos mujeres, mientras las brechas de ingresos, se ubican en un 29% para los trabajos formales y 36,8% para los informales. A la par que crece la pobreza, crece desproporcionadamente el número de mujeres, trans y travestis pobres, con mayor impacto entre la juventud. Qué nos puede esperar en un período en el que se avizora el sostenimiento de la desocupación y una contracción mayor del mercado laboral, a la vez que se quita el IFE y se rearmen prepuestos de asistencia que resultan migajas en comparación con el dinero que se destina a los buitres. Y los costos de estas decisiones políticas los pagamos nosotras. En lo que va del año al 31 de octubre, se cometieron 255 femicidios, uno por día y la falta de trabajo y vivienda que posibilite indepen-

dizarse del agresor, han sido en plena cuarentena y período de aislamiento, los ejes que sobresalieron en las denuncias y los pedidos de asistencia, junto con la falta de respuestas por parte del Estado que, en la mayoría de los casos, empuja a las mujeres a quedarse donde están. En este sentido Guernica, mostró de fondo en qué punto estamos y qué intereses está dispuesto el gobierno a defender y cuáles no: la lucha por tierra y vivienda, fue protagonizada por muchas mujeres en situación de violencia machista con hijos a cargo, que buscaron una salida a su situación y la respuesta del gobierno fue reprimir y pasar topadoras por las humildes casas levantadas, todo esto en favor de los grandes grupos inmobiliarios.

No es nuevo que por parte de los gobiernos, a la hora de abordar la violencia por motivo de género, del dicho al hecho haya mucho trecho. No es por ser catastrofistas, sino por despejar el panorama, que hay que decir las cosas como son para salir a luchar por lo que nos corresponde. En este contexto como parte del pueblo trabajador, la pelea para no pagar la crisis es parte insoslayable de nuestro programa de lucha. El 25N tenemos que buscar la posibilidad de reagrupar al movimiento de mujeres y feminista con este objetivo, tarea que no empieza ni termina en esta fecha. El 25N tenemos que hacer ver que el feminismo está con las familias de Guernica que aún necesitan las viviendas por las cuales lucharon. Tenemos que impulsar -con el empuje de la lucha de las compañeras piqueteras- la unidad de las trabajadoras ocupadas y desocupa-

das en la tarea de enfrentar el ajuste, el hambre, la desocupación, los salarios y jubilaciones a la baja, así como las reformas laborales impuestas gracias a la complicidad de las burocracias sindicales. Tenemos que poner en las calles nuestro grito de Ni una Menos con la fuerza que nos dan los ejemplos de la luchas como las de Jujuy, exigiendo que se vayan los responsables políticos de los femicidios, porque el Estado y los gobiernos son responsables. Por Lara, Cesia, Gabriela y por todas, el grito por justicia tiene que volver a tomar vuelo para que se cumplan cada una de nuestras exigencias hasta que dejen de matarnos. Y hay que salir con todo por el aborto legal, seguro y gratuito. También contra la persecución y represión a las luchas, sumando en todo el país la exigencia de que se baje la causa contra la compañera Viviana Toros y el compañero Maxi Torres de Chaco, armada por el gobierno provincial luego de una movilización realizada exigiendo justicia por Lilian y María del Carmen, las niñas argentinas asesinadas por el Estado paraguayo.

La disputa para que el destino de los recursos del país vayan a las necesidades populares, a trabajo, salud, educación y vivienda digna y no al pago de la deuda y el FMI, requiere de la intervención rebelde del pueblo trabajador y apostamos a poner al movimiento de mujeres y feminista en ese camino para, de una vez por todas, dar vuelta la tortilla a nuestro favor.

**Julia Quinteros**

# Elecciones en EEUU

*Unos 76 millones de votos para Joe Biden, frente a algo más de 71 millones que cosechó Donald Trump, son la prueba que ostentan los demócratas para reclamar la presidencia de los EEUU. A dos semanas de la elección, la principal potencia mundial sigue sin tener un presidente oficialmente electo. Con una multiplicidad de formas de voto, acusaciones de fraude, amenazas de hacer intervenir a la Corte Suprema, y civiles armados en las colas de votación exigiendo que se cierren las urnas, la elección dejó escenas propias de un país “bananero”, en la nave insignia de la democracia occidental.*

Si bien ambos candidatos fueron los más votados en la historia de EEUU, lejos estará el futuro gobierno de Biden de gozar de una situación de fortaleza. En primer lugar, el Senado va a estar compuesto por una mayoría de republicanos (48 contra 46 demócratas), y entre los “representantes” (el equivalente a nuestros diputados), la mayoría demócrata se reduce respecto a la conformación actual: 215 demócratas (-4) y 198 republicanos (+5). El presidente electo de mayor edad en la historia nacional (78) deberá lidiar con esta paridad al menos hasta la mitad de su mandato.

Para complejizar ese cuadro, el triunfo del retador no dejó a su oponente tirado en la lona. El magnate republicano se retirará de la Casa Blanca ha-

biendo arañado el 50% de los sufragios y con casi 10 millones de votantes más que cuatro años antes, cuando dio el batacazo al ganar la presidencia contra todas las encuestas. No solo esto, se retira ejerciendo la representación política de la mayoría de los principales sectores sociales castigados por la crisis económica con que llegó a la presidencia. Y, más inquietante aún, dentro de ese electorado que le fue fiel, hay grupos radicalizados por derecha que han ido ganando confianza para salir repetidas veces uniformados y armados a las calles. El conservador Biden deberá resolver como convivir con ese dolor de cabeza, partiendo de la base de que gobernará un país dividido.

Sin embargo, la principal dificultad para el futuro gobierno estará en el frente económico, recostado en la inocultable decadencia del peso internacional de los Estados Unidos como única e indiscutible potencia imperialista a nivel mundial. El país más rico del mundo tiene al 60% de su población sobreviviendo sin ninguna capacidad de ahorro, a pesar de complementar dos o más empleos para



llegar a fin de mes. El 0,1% de la población acumula lo mismo que el 90% del resto. Estos niveles de desigualdad extrema son una bomba social en potencia, que ya ha empezado a crujir desde lo racial. La 'salida Trump', apostando por el proteccionismo será cerrada entre paréntesis para volver a la opción multilateral, en busca de la preminencia global amenazada. Mientras se resuelve la sucesión en EEUU, 15 países de la región Asia-Pacífico, con China a la cabeza, acaban de firmar el mayor tratado de libre comercio del mundo, dejando afuera a EEUU.

El mandato que le espera a Biden será cuesta arriba en todos los aspectos, y es de esperar que esto lo sufran todos los países dependientes y pueblos oprimidos del mundo. La primera potencia mundial se encuentra en serias dificultades para mantener su posición privilegiada a nivel global y no se va a resignar sin hacer uso de todas sus herramientas. Está de más decir que un "demócrata" al timón no es ningún alivio para el mundo dependiente, y menos un conservador belicista como Biden. Ha sido senador desde 1973, fue vicepresidente de Barack Obama, y siempre un peón de Wall Street y del complejo militar-industrial. Artífice del rescate a los grandes bancos y financieras después de 2008, y mano de yeso para votar las invasiones a Irak y Afganistán, como las intervenciones militares en Libia y Siria. "Soy el tipo que elaboró el Plan Colombia", supo declarar con orgullo el nuevo mandamás de la Casa Blanca.

Se ha planteado un programa de tres ejes de du-

doso cumplimiento: renovar y fortalecer la democracia dentro de los Estados Unidos (ya empezó con el pie izquierdo) y en el plano internacional (todos sabemos en qué consiste la “exportación de democracia” que acostumbran los yanquis). Nuevos acuerdos comerciales para frenar el avance internacional de China, particularmente en la ‘post-pandemia’. Para lo cual estaría llegando tarde, al menos a la estratégica zona del Asia-Pacífico. Y encabezar las relaciones internacionales, como estaba acostumbrado a hacer desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Otro objetivo que lo obligará a recuperar terreno a los codazos.

Todo esto asentado en una sociedad que solo parece unificarse en el hartazgo con un establishment político que no acierta en resolver ninguno de los problemas esenciales de su pueblo: ni la crisis económica, ni la segregación racial, ni la pandemia, ni la creciente pobreza y desocupación. Si a esto se suma la repetición en los últimos años de manifestaciones callejeras cada vez más masivas y violentas, y la existencia de numerosos grupos civiles paramilitares armados hasta los dientes desfilando por distintas ciudades, la perspectiva estadounidense dista mucho de la estabilidad y crecimiento que planteó Biden en campaña.

**Leo Funes**

*¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS  
PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!*